República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Medellín, veintidós de septiembre de dos mil veintidós

Radicado	0500131031920220029500
Asunto	Rechaza demanda

Dentro del término establecido para el efecto, se constata que la parte demandante presentó escrito de subsanación. Sin embargo, y una vez revisado dicho escrito, el Juzgado concluye que la parte actora no cumplió cabalmente con las exigencias realizadas a través del proveído de 28 de febrero de 2022, según se explicará más adelante.

Valga aclarar que dichas exigencias se hicieron dentro del marco del Art. 82 del C.G.P., bajo el entendido que tal disposición ordena, en sus numerales 4º y 5º, que las pretensiones sean expresadas de forma precisa y clara; y que los hechos que fundamentan éstas sean expuestos de forma determinada, respectivamente.

Ahora bien, en cuanto a la precisión y claridad que se demanda de las pretensiones, se tiene que, a la luz de la RAE, el vocablo **preciso** denota aquello que es “*Perceptible de manera clara y nítida*”¹; y que el concepto de **claro** atañe a “*aquello que es “Inteligible, fácil de comprender”*”². Por su parte, y respecto a la determinación que se depreca de los hechos, se observa que, acorde a la RAE, el verbo **determinar** alude a la acción de “*Señalar o indicar algo con claridad o exactitud*”³.

Puntualizado lo anterior, se expondrá con mayor detalle las razones por las cuales el Despacho concluyó la ausencia de satisfacción de los tan mencionados requisitos:

1. En el numeral 1º de la providencia inadmisoria se solicitó aportar no solo el certificado de libertad y tradición de los inmuebles objeto del litio actualizado sino además el certificado especial expedido por la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos. A pesar de ello, no se satisfizo tal exigencia, puesto que, si bien allegaron los primeros, los certificados especiales regulados en el artículo 69 de la Ley 1579 de 2012 no fueron anexados.
2. En el numeral 3 de la inadmisión se requirió al demandante para que de manera diáfana señalara la calidad en la que demandaba a Marleny Muñoz Ardila, Carlos Mario Muñoz Ardila y John Fredy Muñoz Ardila, si como herederos de Carmen Otilia de los Dolores Ardila, en su calidad de propietaria de los inmuebles, o como adjudicatarios ya considerados titulares del derecho real de dominio sobre los inmuebles objeto del proceso, lo conllevaba por su puesto a que se anexara prueba de la calidad atribuida. Al respecto, en la subsanación se dilucidó tal situación y se les demandó como herederos determinados de Carmen Otilia de los Dolores Ardila, pese a ello no se probó en debida forma dicha calidad, en tanto no se aportaron los registros civiles o providencias emitidas por el juez respectivo que dieran cuenta del parentesco aducido –artículo 85 del C.G.P.-, de suerte que no puede entenderse atendida a cabalidad la exigencia realizada.

¹ <https://dle.rae.es/preciso?m=form>

² <https://dle.rae.es/claro?m=form>

³ <https://dle.rae.es/determinar#DaOWspV>

3. Respecto a lo exigido en el numeral 5 de la inadmisión, relativo a indicar el domicilio de las personas que integran la parte demandada, debe decirse que ello no fue cumplido, en tanto, no se señaló con claridad el domicilio de cada uno de los demandados, manifestándose únicamente el de John Fredy Muñoz Ardila. Por lo demás, se limitó el actor a indicar nuevamente la dirección para notificaciones judiciales, sin que puedan confundirse los conceptos de domicilio con el de lugar de notificaciones judiciales, al ser aquel un atributo de la personalidad y este un lugar de localización para efectos procesales. No en vano ambos son exigidos como requisitos formales de la demanda en numerales diferentes del artículo 82 del C.G.P, a saber, numerales 2 y 10 de la mencionada norma. Aunado a que domicilio y residencia también son conceptos disímiles.

Sobre el particular ha indicado la Corte Suprema de Justicia ha indicado que *“No es factible confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda”*⁴

4. En los numerales 6 y 7 del auto inadmisorio se solicitó además de allegar los avalúos catastrales de los inmuebles, corregir el acápite de competencia de cara a estos; si bien se allegaron las fichas catastrales de los bienes, de los cuales dos de ellos resultan completamente ilegibles. a saber, archivo 004 páginas 40 a 45, no se compadecen las sumas indicadas para determinar la cuantía por el demandante (Cfr. archivo 004, págs. 3 y 12) con las indicadas en los documentos aportados, por consiguiente, no puede tenerse cumplida la exigencia realizada.

5. Lo exigido en numeral 11 de la inadmisión también fue desentendida, en tanto, no se relató de manera detalla en qué consistía el poder general que fue conferido a Marlene Muñoz Ardila por los demás herederos, al respecto simplemente se adujo que la misma contaba con poder de Carlos Mario (Cfr. archivo 004, pág. 7, hecho 11), sin puntualizarse el rol que esta desempeñaba frente a los bienes. Aunado ello, se resaltó que éstos luego de ser entregados por el secuestre tuvieron poco interés por parte de Marlene, sin embargo, no se dio efectiva claridad respecto a las razones por la que ésta debía tener especial interés en ellos o por las que tenía la administración de los mismos.

6. En el numeral 12 se pidió indicar en forma expresa el momento en que terminó la administración de Marlene Muñoz Ardila e inicio la del demandante y las condiciones en las que se desarrolló una y otra administración, pero ello no fue acatado por el actor, quien al respecto guardó absoluto silencio sin dar los pormenores que le fueron exigidos. Ello, impide que los hechos tengan la determinación exigida por la normal procesal.

7. En el numeral 13 se le exigió aclarar lo narrado en el hecho séptimo de la demanda inicial, a pesar de que se relató con más detalle el trámite ante la inspección de policía y el requerimiento realizado por la Fiscalía General de la Nación, nada se dijo en lo atienen a los “actos tendientes a la entrega de los bienes muebles” por parte de los herederos,

⁴ Corte suprema de Justicia Auto de 20 de noviembre de 2000, Exp. N°0057, citado en auto de 10 de julio de 2013, Exp. No.11001 02 03 000 2013 01145 00, M.P Margarita Cabello Blanco

lo que deviene en que el hecho continúe siendo abstracto e indeterminado, de modo que no puede inferirse a que alude el demandante con tal relato. En consecuencia, la causal de inadmisión también fue desentendida.

8. En el numeral 14 se reclamó al demandante expresar en forma diáfana las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que principió la posesión y lo referente a la calidad de administrador del bien. En similar sentido en los numerales 15 a 18 y 22, se pidió contextualizar, concretar y dar claridad respecto a hechos relacionados con la posesión del actor; pese a ello, del escrito de subsanación no se extrae con precisión lo referente a los actos de señor y dueño a los que alude el demandante, en la medida que no solo no se ubican de una manera precisa temporalmente sino que tampoco se especifican las circunstancias de modo y lugar en las que se presentaron o desarrollaron, ni se pormenoriza en qué consistieron, relatándose de una manera abstracta e imprecisa. En otras palabras, no se expone a detalle en que consistieron los gastos que generaron los inmuebles y fueron asumidos por el demandante, o los arreglos realizados, las reformas, los contratos de arriendo celebrados y demás actos de posesión expuestos. Menos aún puede discernirse cuáles fueron los “*problemas con un parqueadero inmueble objeto de este litigo*”, la fecha en que se presentaron y la forma en la que resolvieron.

Así entonces, no puede tenerse como cumplido los requisitos contenidos en los referidos numerales, mismo que se encaminaba, además, a fundamentar la pretensión primera desde la narración fáctica, y, tal y como viene de indicarse, en el escrito de subsanación allegado, se sigue apreciando falta de nitidez en cuanto a la presentación de la posesión que afirma haber desplegado el demandante. El actor no cumple con una debida determinación de los hechos, dado que lo hace de forma genérica y sin una contextualización o individualización nítida para con cada uno de los reclamos que esgrime. Ello impide la precisión y claridad que ha de predicarse del acápite de hechos y pretensiones conforme lo contemplado artículo 82 del C.G.P.

9. El numeral 18 no fue cumplido, dado que se le exigió que presentara debidamente la demanda de cara a la acumulación de pretensiones que eleva, lo que implicaba que cada reclamo estuviera debidamente cimentado en una exposición de hechos individualizada y detallada según el petitum perseguido.

10. En los numerales 19 y 24 se advirtió que el hecho 15 y la pretensión 3ra, relacionados con reconocer el pago de la administración, mejoras y gastos realizados por el demandante respecto a los inmuebles objeto del proceso, además de no ser una exposición fáctica no se compadecían con el trámite adelantado. No obstante, no realizó una debida adecuación y acumulación de pretensiones –ver pretensión tercera archivo 004, pág. 12-, sumado a que se presenta de forma antitécnica, dado que carece de sustento fáctico desde la causa petendi. Se reitera que es imprescindible adecuar la demandan en forma rigurosa, es decir, presentando la causa petendi de forma diáfana y debidamente cimentada y determinada, en la medida que. desde el concepto debida individualización de lo pretendido⁵ debe existir una relación entre lo que se pretensiona y la causa petendi. En suma, las exigencias de dichos numerales de la providencia inadmisorio fueron desatendidos, incurriendo nuevamente en indebida acumulación de pretensiones.

11. En el numeral 21 se exigió al actor dar claridad de cara a la posesión que alega tener desde septiembre de 2011 respecto a la demanda con pretensión divisoria por él instaurada en 2012, sin embargo, no se dio cumplimiento, por el contrario, lejos de dar

una explicación fueron expuestas circunstancias aún más confusas, en atención a que, en la subsanación-hecho 26- se indica “Desde **septiembre de 2022** fecha en que mi representado entro en posesión”, “**el año 2012** dijo voy a entregarle a mis hermanos lo que **el juzgado les adjudicó**, y solicito proceso divisorio pero por desinterés de los demandados mi representado dejo el proceso quieto a tal punto que decretaran el desistimiento tácito” (negrilla fuera de texto), lo que genera una contradicción mayor en la fecha en la que inició la posesión. Adviértase que, las pretensiones que esbozan en el *sub lite* no deben resultar contradictorias con los hechos que presenta, por el contrario, deben guardar consonancia y ser su pilar, cosa que no sucede en este caso.

12. No se dio cabal cumplimiento a lo indicado en el numeral 22, por cuanto la parte debió señalar ello con exposición clara de condiciones de tiempo, modo y lugar. Por el contrario, la parte presenta en un nuevo hecho –hecho 27- una presentación genérica que no satisface la determinación de los hechos.

13. En el numeral 29 se le requirió para adecuar lo relativo al dictamen pericial solicitado, al respecto, manifestó “no contamos con dictamen pericial.” (Cfr. archivo 004, pág. 4), sin embargo, en la demandan se evidencia “PERICIAL. Solicito sea llamada a la contadora publica...), luego, no se cumple el requerimiento realizado.

14. Tampoco se observó cumplimiento del requerimiento realizado en el numeral 31 de la inadmisión, esto es, acreditar el envío de la demanda y sus anexos a los demandados en debida forma, así como de la subsanación de la demanda, en los términos del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, pues ello no fue demostrado por la parte actora.

Ahora, se pretendió soslayar el acatamiento de lo requerido con la solicitud de una medida cautelar, lo cual no es de recibo por ser una situación sobreviniente, sumado a que la cautela de inscripción de la demanda responde a una función oficiosa en cabeza del juez y en esta clase de procesos dicha cautela tiene una función que va más allá de atender los propios intereses de la parte actora, pues se trata de una medida que se inclina por “...informar a los terceros de la existencia de un proceso judicial sobre un bien sujeto a registro, para que estén advertidos de que si llegan a realizar cualquier negocio sobre dicho bien, la sentencia que se profiera les será oponible...”¹

En línea con lo expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá² concluyó que: “...la solicitud cautelar que la promotora enarbó en su demanda no tenía el alcance de enervar el requisito atañadero a notificar a su contraparte del escrito incoativo y sus anexos, pues, en todo caso, de no haberse deprecado esa cautela, la misma habría tenido que decretarse por ministerio de la ley (art. 409, Ley 1564/12), de suerte que ni quita ni pone ley el hecho de que hubiera solicitado esa precautoria, la que como se sabe, resulta obligatoria en los procesos de prescripción adquisitiva, servidumbre, deslinde y amojonamiento, y divisorio...”; y más adelante enfatizó: “...Dicho de otra manera, no puede pretenderse que por la sola invocación del decreto cautelar desaparezca la obligación de enterar al extremo demandado, pues aún de guardar silencio al respecto, la ley contempla para el juzgador la obligación de inscribir la demanda; luego, torna inane una petición en ese sentido...”.

15. Lo pedido en numeral 32 de inadmisión de demanda no se cumplió, pues no se aportaron los documentos allí señalados de manera completa y legible.

Así las cosas, y al no cumplirse en debida forma las exigencias prescritas en el auto inadmisorio de la demanda, las cuales se hicieron con fundamento en lo establecido en

los Arts. 82 y 90 del C.G.P., y en atención a la figura de la perfecta individualización de lo pretendido, el Juzgado,

RESUELVE,

Primero: Rechazar la demanda de la referencia, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No hay lugar a devolver anexos o a realizar desgloses, toda vez que la demanda fue presentada de forma virtual.

NOTIFÍQUESE
ÁLVARO ORDÓÑEZ GUZMÁN
JUEZ

6

Firmado Por:
Alvaro Eduardo Ordoñez Guzman
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 019
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c4d1f736089f389719fcdc94c8de5e102ecf2a3a338262fca263ce7a760c9a8d**

Documento generado en 22/09/2022 11:57:38 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>